

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **ELIZABETH PARRA**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y **GABRIEL ESTEBAN ALZATE PARRA**, proceso tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-001-2018-00064-01**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que se declare que le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el deceso de su compañero permanente Gabriel Antonio Alzate Velásquez en un porcentaje del 50%, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, subsidiariamente la indexación y las costas procesales.

Como fundamento fáctico de las pretensiones, en lo que interesa resolver a esta instancia, expone la demandante que el señor Gabriel Antonio Alzate falleció el 6 de agosto de 2008, encontrándose asegurado para los riesgos de invalidez, vejez y muerte en la AFP Colpensiones.

Aduce que convivió con el señor Gabriel Antonio Alzate en calidad de compañera permanente por aproximadamente 14 años, convivencia que se dio de manera ininterrumpida, sin que hubiese mediado separación alguna hasta el momento del

deceso de su compañero, con quien procreó un hijo de nombre Gabriel Esteban Alzate Parra, nacido el 26 de julio de 2000.

Indica que reclamó en nombre propio, y en representación de su hijo la prestación de sobrevivientes ante Colpensiones, entidad que mediante Resolución No. 017292 del 13 de septiembre de 2010, negó la pensión con el argumento de que no había acreditado la convivencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la muerte del causante, concediéndole la prestación en un 100% a favor del menor GABRIEL ESTEBAN ALZATE PARRA, en calidad de hijo, a partir del 6 de enero de 2008, en cuantía de \$461.500

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, condenando a Colpensiones a reconocer y pagar a favor de la señora ELIZABETH PARRA la pensión de sobreviviente causada por el deceso de su compañero, prestación inicialmente reconocida al hijo del causante, GABRIEL ESTEBAN ÁLZATE PARRA, quien arribó a la mayoría de edad el 26 de julio de 2018.

En razón de lo anterior, condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar a favor de la accionante el 50% de la mesada, desde la ejecutoria de la sentencia, advirtiendo que la mesada se acrecentaría en un 100% para los periodos en que GABRIEL ESTEBAN ÁLZATE PARRA no acceda a los mismos por no acreditar la calidad de estudiante, y en todo caso cuando este cumpla los 25 años de edad, es decir el 26 de julio de 2023, sumas que deberán ser indexadas.

También condenó a COLPENSIONES a pagar a ELIZABETH PARRA las mesadas no pagadas a GABRIEL ESTEBAN ÁLZATE PARRA desde que este cumplió la mayoría de edad, esto es desde el 26 de julio de 2018, por no haber acreditado la calidad de estudiante, mismas que deberán ser indexadas.

Declaró próspera la excepción de COMPENSACIÓN propuesta por la entidad, e impróspera la de PRESCRIPCIÓN.

Costas a cargo de COLPENSIONES y a favor de ELIZABETH PARRA.

Para sustentar la juez su decisión, argumentó que conforme a la carga de la prueba la demandante acreditó el requisito de convivencia por espacio mínimo de 5 años, en tanto las declaraciones extrajudiciales como las declaraciones recibidas en audiencia, dan cuenta que la pareja convivió por lo menos desde el año 2003, cuando la testigo Gloria Inés Jaramillo Franco afirmó que llegó a vivir en la misma residencia de la demandante y su compañero, en una habitación separada puerta a puerta; y en el caso de la declarante Astrid Janeth Ruda, esta dijo que conoció que la pareja inició la convivencia en el año 1995, acreditándose así el requisito de convivencia exigido por la ley, por lo que concluyó que la demandante es beneficiaria de la prestación que reclama.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La anterior decisión fue apelada por los apoderados judiciales de la demandante y Colpensiones, en los términos que se describen a continuación:

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.

El apoderado de la demandante apeló parcialmente la sentencia de primera instancia, manifestando su inconformidad en lo concerniente a absolución por los intereses moratorios, indicando que en el presente tema existen dos normas llamadas a gobernar el caso, esto es, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 de la Ley 717 de 2001.

La primera de ellas habla de la existencia objetiva de la sanción de los intereses moratorios por el retardo injustificado en el pago de las mesadas, sin embargo, la interpretación que se le da a esta disposición normativa no hace una valoración subjetiva para la aplicación de esta sanción, es simplemente una reparación o compensación por el retardo en el pago de las mesadas, así que se debe de tener en cuenta el momento de la reclamación administrativa y al interponer esta demanda, se allegaron pruebas de la convivencia, como fue la declaración extrajuicio que reposa a folio 21 del expediente, rendida por la hermana del causante, esto es, la señora FLOR ANGELA ÁLZATE VELÁSQUEZ.

Aduce que se debe de recurrir al artículo 1 de la Ley 717 de 2001, que esboza que las pensiones de sobreviviente deben ser resueltas a los dos (2) meses siguientes a la reclamación, término que fue superado por creces por la entidad demandada, no

teniendo cabida interpretaciones de elementos subjetivos en el desarrollo del trámite administrativo, que dio una negativa para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, cuando se trataba de elementos plenamente demostrados. Concluyendo que, la entidad demandada se hizo la de la vista gorda frente a la investigación administrativa que debía de realizar cuando existía un hecho tan evidente como la existencia de descendencia y la de una posible pareja del señor Gabriel Antonio. Citando la sentencia SL 3130 de 2020 donde la CSJ concluyó al respecto de los intereses moratorios que “(ii) El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el propósito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales frente a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de las pensiones. Por consiguiente, estamos frente a una regulación unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones sin importar su origen legal. (iii) Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados...”

Con la anterior cita, la Sala abandona el criterio jurisprudencial que se venía haciendo sobre cualquier valoración subjetiva sobre el tema de los intereses moratorios, para pasar a ser una sanción meramente que se configura con el retardo injustificado de las mesadas pensiones, por lo que solicita que se revoque este punto y se procede a reconocer los intereses moratorios a favor de su representada.

APELACIÓN DE COLPENSIONES.

El apoderado de COLPENSIONES, interpuso el recurso de apelación, manifestando que el despacho desconoce la prueba espontánea recaudada en la investigación administrativa realizada por el ISS hoy COLPENSIONES, reiterando que la inmediatez de la prueba resulta más fidedigna, que la que pueda ser recaudada con posterioridad, como la prueba testimonial.

Continuó diciendo que se podía evidenciar que los testigos tenían como un libreto con fechas, lo que demuestra suspicacia al momento de su valoración; además de

ello, existió prueba en la investigación de la que se puede colegir que el causante vivía con su madre, María Vásquez de Álzate.

Ahora bien, del interrogatorio de parte absuelto por la demandante, confesó que ella y su hijo siempre habían estado afiliados al Sisben, nunca como beneficiarios del causante, así que de haberse dado una convivencia no tiene sentido que el cotizante teniendo la posibilidad de afiliarse a su compañera e hijo, tengan esto que recurrir al Sisben, lo que resulta en un indicio serio y contundente, para establecer que nunca hubo convivencia, y que lo único que ataba al finado Gabriel y Elizabeth, fue la procreación de su hijo Gabriel Esteban.

Expone, que la decidía de saber del paradero de su compañero, asesinado tan solo 8 días después, fuerza más el argumento de la no convivencia, además de que los testigos aducían que la pareja se comunicaba a diario de forma telefónica, siendo evidente, que no se acreditan los presupuestos de que trata la jurisprudencia sobre la convivencia, en tanto tenga la pareja la intención de conformar una familia, y como tal exige el cumplimiento de unos derechos y deberes de unos respecto de otros, la familia como tal exige que no solo elementos fácticos como el sitio de vivienda común, sino además de una interrelación subjetiva de manera permanente que haga que la convivencia no sea de otra clase diferente.

Dijo la demandante en su interrogatorio, que el anterior abogado le había manifestado que recibiera la pensión del hijo, y que más adelante verían que acto se haría para conseguir la pensión para ella, considerando que no se acreditó por parte de la demandante la convivencia que le exige la Ley, por lo que solicita que se revoque íntegramente la decisión de primera instancia y se condene en costas en favor de su representada.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, las apoderadas de la DEMANDANTE y de COLPENSIONES. allegaron escrito de alegatos, en los cuales señalaron resumidamente, lo siguiente:

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

“... SOBRE LOS INTERESES MORATORIOS

Aunado a los argumentos esgrimidos a través del recurso de apelación interpuesto, quiero reiterar que de manera pacífica la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, en algunas situaciones excepcionales, ha eximido a los fondos de pensiones del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

Esto por ejemplo, cuando la sentencia tiene como fundamento la aplicación de una interpretación jurisprudencia, como podría ser el caso de la aplicación de Principio de la Condición más beneficiosa o de la Tesis de la Capacidad residual o cuando existen serias dudas sobre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en casos de cónyuge supérstite y compañera permanente, o en casos inclusive de negativa por el requisito de la fidelidad de la afiliación al sistema pensional; sin embargo, para el caso de marras, no nos encontramos en una circunstancia como la anterior, que permita soslayar la obligación que tiene el fondo de pensiones en el reconocimiento de la pensión en término legal con su respectivo retroactivo pensional, pues el fondo de pensiones negó la prestación solo con una interpretación sesgada de las pruebas recaudadas en la etapa de reclamación administrativa, y así se sostuvo dentro del trámite judicial.

Para lo anterior, simplemente citar sentencias sobre la materia como la SL 2609 de 2021 o SL 2512 del 2021

Por lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios reclamados.

ALEGATOS DE COLPENSIONES

Además de las consideraciones expuestas en el recurso de alzada, me permito esgrimir las siguientes:

Es menester tener en cuenta que el artículo 13 la Ley 797 de 2003, respecto a los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, estableció:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y hay convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (...)"

Conforme a lo expuesto se entiende que se tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge o compañero (a) permanente siempre y cuando se acredite la convivencia con él o la causante dentro de los cinco años anteriores al deceso.

En este punto, cabe señalar que la realización de una investigación administrativa, dentro del trámite de pensión de sobrevivientes, resulta procedente como medio probatorio oficioso, en los términos del Artículo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; de igual forma se implementa con la finalidad de adoptar una decisión de fondo que se encuentra ajustada a derecho, cuando de los medios probatorios aportados por los solicitantes no sea viable establecer la condición de beneficiario o los extremos de convivencia con el causante, en consonancia con los principios que rigen la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y para evitar que por imprecisiones originadas en el material aportado con la solicitud, se expida un acto administrativo que deba ser objeto del mecanismo de revocatoria unilateral previsto en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el establecido en el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011.

En concordancia mediante verificación administrativa, que realizo el ISS, a través del grupo de verificación de la Gerencia Seccional de Pensiones, una vez practicadas las pruebas, con el respeto de los principios que consagra el Artículo 5° de la Ley 58 de 1982, esto es con la audiencia de las partes y con la relación de los medios de prueba solicitados por la peticionaria y decretados por el Instituto, analizado en acervo probatorio se pudo establecer que NO EXISTIO CONVIVENCIA DE MANERA ININTERRUMPIDA entre el asegurado fallecido GABRIEL ANTONIO ALZATE VELASQUEZ y la señora ELIZABETH PARRA al momento del fallecimiento, por cuanto las pruebas demuestran que:

- “GABRIL ANTONIO ALZATE VELASQUEZ era soltero, nunca tuvo relación de convivencia con ninguna pareja sentimental, sea esposo o compañero permanente según manifestación del señor IVAN DARIO ALZATE VELASQUEZ.
- Que el día 05 de diciembre de 2008 se realizó visita de carácter social al sector donde residía el señor GABRIEL ANTONIO ALZATE VELASQUEZ y la señora ELIZABETH PARRA. Se le toma testimonio al señor MARIO y manifiesta que vive desde hace 22 años en el sector y manifestó que no le conoció relaciones de convivencia, para cuando falleció el asegurado este se encontraba viviendo con sus padres y un hermano.
- La solicitante para cuando falleció su compañero GABRIEL ANTONIO ALZATE VELASQUEZ, ese fin de semana se encontraba en la casa de la mama en San Juan con la 80.
- Que los gastos funerarios del asegurado fueron realizados por su hermano IVAN ALZATE, y que la solicitante no asistió al velorio ni al entierro, por lo que la familia del asegurado no le aviso ya que no tienen buena relación con ellos.
- Por último, la familia del asegurado falleció manifiesta en una carta enviada el 10 de septiembre de 2009 su inconformidad de la reclamación que hace la señora ELIZABETH PARRA ya que nunca convivio con el asegurado, lo cual significa que la convivencia no era de carácter público y notorio característica fundamental en la conciencia de cónyuge y compañeros.”

En atención a lo anterior, se evidencia que no existe certeza de que la accionante y el causante convivieron dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento, coligiéndose en tal sentido que al no acreditarse la calidad de beneficiaria no resulta procedente acceder a lo pretendido.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si la demandante ELIZABETH PARRA probó en este proceso, cumplir con los requisitos legales para obtener el derecho a la pensión de sobreviviente demandada, y de ser así, si dicha prestación le debe ser otorgada con los intereses moratorios de que trata el Art. 141 de la Ley 100 de 1993

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

El análisis del caso versará sobre lo que es objeto del recurso de apelación atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual, la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad, no obstante, de conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Sea lo primero manifestar que, se encuentra aceptado por la demandada y por tanto fuera del debate probatorio que el causante Gabriel Antonio Álzate Velásquez para la fecha de su óbito tenía cotizadas las semanas que establece la ley para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes, tanto así que el derecho pensional le fue otorgado por el ISS al hijo del causante, como se desprende del acto administrativo No.017292 del 13 de septiembre de 2010 (01ExpedienteDigitalizado folios 20 a 24), quedando por determinar en este litigio, si la demandante acreditó o no el requisito de convivencia con el causante, para resultar igualmente beneficiaria de la prestación, como lo pretende.

Por lo anterior, debemos de tener en cuenta que, el causante de la prestación demandada falleció el 6 de enero de 2008, como se como se registra en el registro civil de defunción inserto en la página 2 del expediente digital (02. ExpedAdmi-archivo GEN-ANX-CI-2017_11271266-20171024031835), siendo la norma a aplicar para definir el derecho que tengan o no los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, la vigente para la fecha del deceso del causante, es decir, el art. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, norma esta última, que dispone en el literal a), que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, y que en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida

marital con el causante hasta su muerte, y haya convivido con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

A pesar de lo anotado en precedencia, se debe poner de presente que desde el año 2011, la Sala de Casación Laboral (en adelante SCL) de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia 40055 del 29 de noviembre de 2011, M.P. Dr. GUSTAVO JOSÉ GENEKO MENDOZA, posición que ha sido ratificada en posteriores sentencias, al interpretar el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha precisado que los 5 años de convivencia cuando se trate de esposos, es decir, de personas que contrajeron matrimonio, para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes, no debe haber ocurrido necesariamente en los últimos cinco (5) años, sino en cualquier tiempo siempre que sea continua durante 5 años.

Ahora, para el caso de la compañera o compañero permanente supérstite, en un principio, la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que debía acreditarse, que estuvieron haciendo vida marital con el o la causante hasta su muerte, y haya convivido con el o la fallecida no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte, sin importar que el o la causante fuera pensionado o afiliado.

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1730 de 2020, revaluó la posición jurisprudencial, sobre la exigencia de los cinco años de convivencia para hacerse acreedor a la pensión de sobrevivientes cuando se tratara de un afiliado al sistema pensional, para realizar una nueva interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiendo que el mínimo de convivencia de 5 años se aplica únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado, pero que en el caso de los afiliados: *“... no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma analizado, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia...”*. Además, se precisó en la citada Sentencia que para efecto de lo consagrado en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, *“no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el*

núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social.”.

El anterior criterio fue ratificado en las Sentencia SL3626-2020, SL3785-2020 y SL4008-2020.

No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia SU-149 de 2021, dejó sin efectos la providencia SL1730 de 2020, al concluir que en ella se incurrió en defecto sustantivo por una interpretación irrazonable del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Advirtiéndose ello, de su contraposición con los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional que además produce resultados desproporcionados respecto de la protección de la familia y las finalidades de la pensión de sobrevivientes.

Además se argumentó en la citada sentencia de unificación que la Sentencia SL1730 de 2020, incurrió en desconocimiento del precedente, de la Corte Constitucional fijados en la sentencia SU-428 de 2016, apartándose la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indebidamente de esa decisión, sin cumplir con las cargas de transparencia y suficiencia de la argumentación, pues no se refirió explícitamente su apartamiento del precedente fijado por la Corte Constitucional, ni mucho menos expuso en forma adecuada las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, a pesar de que se trataba de un fallo de unificación que determinaba, con carácter vinculante, el contenido y alcance del derecho a la seguridad social ante el problema jurídico materia de decisión en el asunto de la referencia.

En ese orden de ideas, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que acoge de tiempo atrás esta Sala del Tribunal, en este asunto, acorde al material probatorio, se analizará el requisito de convivencia de la demandante y el causante, por un lapso no inferior a cinco años ininterrumpidos con anterioridad al deceso del causante.

En ilación con lo anterior, se practicó interrogatorio a la demandante, **ELIZABETH PARRA**, el cual se encuentra grabado al minuto 015:11 y siguientes de la audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPLy SS (01GrabaciónAudiencia), manifestando en su declaración que conoció al señor Gabriel Antonio Álzate cuando trabajaba cerca de los almacenes en los que él laboraba, ubicados en la carrera 52

en Carabobo. Afirma que convivió Gabriel desde el año 1.995 hasta que el falleció en el año 2008, sin llegarse a separar en este interregno, viviendo siempre en su casa ubicada en carrera 33e No.101 -6. Dice que para el momento de la muerte de Gabriel ella vivía con él y su hijo que era menor de edad, advirtiéndole que el fin de semana del deceso de su compañero, éste se encontraba amaneciendo donde sus padres, ya que él acostumbraba a visitarlos los fines de semana o cuidarles la casa, porque ellos salían, enterándose del deceso de su compañero 8 días después del suceso, ya que la familia de él no le avisó, pues no le tenían mucho afecto, indicando que se enteró de manera tardía del deceso de su compañero Gabriel (minuto 20:14), por lo tanto que no asistió al entierro. Continuó contando que se dio cuenta de la muerte de Gabriel porque ante su ausencia y al tratar de ubicarlo sin saber nada de él, un hermano suyo que era muy amigo de Gabriel, fue a la casa de la familia a preguntar, y ahí fue que se enteró que había fallecido porque lo habían matado, y que ya había sido enterrado. Cuenta que los gastos fúnebres de Gabriel Antonio los había sufragado Iván Alzate, hermano de su compañero. Comentó que su hijo nació el 26 de julio de 2000, en una clínica de Manrique-Piloto, informando que ella y su hijo siempre habían tenido SISBEN. Finalizó contando que ella inicialmente reclamó la pensión y se la negaron, demorándose para reclamar más de 10 años porque no encontraba a su anterior abogado, quien le hizo el trámite mal hecho, pues le dijo que recibiera la prestación como se la estaban otorgando al hijo menor, y que luego hablaban para reclamar la prestación a favor de ella, por lo cual se quedó tranquila.

Por su parte, también declaró la testigo **GLORIA INÉS JARAMILLO FRANCO** cuyo prueba se encuentra grabada al minuto 00:31:37 de la audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPL y SS, quien manifestó que distinguía a la señora Elizabeth y al señor Gabriel Antonio Álzate en razón de vecindad, tanto así que vivió en un apartamentico de la pareja, que lindaba puerta con puerta con la casa de la aludida pareja, informando que había vivido en ese apartamento como 11 años más o menos, desde el año 2003, y que fue ahí donde conoció a Gabriel, a Elizabeth y al hijo de esta pareja a quien distinguió desde los 2 años (00:36:33); expresando que durante los años que los conoció nunca llegó a presenciar que se hubiesen separado, siempre los vio conviviendo bajo el mismo techo. Cuenta que el señor Gabriel falleció el 6 de enero de 2008, producto de un atraco lo mataron, situación que se dio por la 33. Expresa que vio con vida al señor Gabriel dos días antes del percance que le produjo la muerte, indicando que fue un domingo que lo vio cuando

ella descansaba (00:38:19). Dice que no asistió a las honras fúnebres de Gabriel porque se dio cuenta tiempo después de su muerte, cuando le contó Elizabeth. Continuó comentando que Elizabeth era ama de casa y que el señor Gabriel era el que llevaba la obligación económica del hogar, porque lo veía que llevaba el mercado y era quien asistía en la enfermedad a la demandante. Para finalizar indicó que sabía que cuando Elizabeth estaba en embarazo ya convivía con Gabriel, situación que dice saber porque los visitaba cada 8 días, y algunas veces almorzaban juntos (0042:04).

En la anterior declaración, la testigo se contradice al indicar que conoció a esta pareja antes de que naciera el joven Gabriel Esteban y que ella visitaba para esa época a la pareja cada 8 días, sin embargo, al inicio de su declaración había afirmado que al menor lo había conocido cuando tenía 2 años.

Aunado a lo anterior, también se debe tener de presente que esta declarante también se dio cuenta de la muerte del afiliado mucho después del acaecimiento porque se lo contó la demandante, sin haber asistido a las honras fúnebres. Debiéndose igualmente tener en cuenta que a esta testigo se le cuestionó por qué se acordaba con precisión de la fecha de muerte del asegurado, pero no recordaba con precisión la fecha en que se fue a vivir en el apartamento que era propiedad de la pareja, cuando esto último debía de recordarlo con mayor facilidad por ser un hecho propio, situación que igualmente le genera inquietud a esta agencia judicial, que sea la declarante tan precisa con fechas ajenas y el cuestionario le haya costado recordar su dirección actual y la fecha en que ella se fue a vivir en el apartamento de esta pareja, situaciones que realmente son de su competente, resultando esta prueba segada. También, no es creíble lo afirmado por esta testigo en el sentido que vio al fallecido dos días antes de su deceso, cuando la misma actora en su interrogatorio de parte, manifiesta que hacía ocho días el causante se había ido para la casa de sus padres.

Continuando con el análisis de la prueba testimonial, tenemos la declaración de la señora **ASTRID JANETH RUDA** cuyo relato se encuentra grabado al minuto 00:48:45 de la audiencia concentrada del artículo 77 y 80 del CPL y SS, quien manifestó que tenía conocimiento que Elizabeth convivió con Gabriel Antonio, situación que dijo conocer en razón de vecindad, ya que toda su vida ha sido vecina de Elizabeth, aclarando que la demandante siempre vivió en la casa de su madre

Bertha, quien al morir en el año 2002, dejó ésta propiedad que pasó a ser de Elizabeth. Continuó contando que conoció a Gabriel cuando empezó una relación con Elizabeth Parra, esto es en el año de 1995 que empezaron a convivir juntos, antes de que la accionante quedara embarazada. Acto seguido, se le pregunta a la testigo por qué tenía tan claro ese año, pero no fue capaz de explicar la razón (minuto 0:54:50-055:03); advirtiendo que se había enterado de la convivencia de la citada pareja porque Elizabeth le comentó que habían empezado a vivir juntos, contando que le tocó presenciar que el señor Gabriel llevaba mercado a la casa y cuando nació el bebé veía que salían a sacar al niño al sol, manifestando que veía muy de lleno al señor Gabriel y que por eso dice que vivió ahí. Continuó contando que Gabriel Antonio falleció en el año 2008, producto de un atraco en el que fue asesinado, enterándose de esta situación porque le contó Elizabeth, advirtiendo que no había asistido a las honras fúnebres, sin embargo, dice tener conocimiento de que fue la familia de Gabriel Antonio quien se encargó de los gastos fúnebres, y que fue por eso que no le avisaron a la demandante, ya que no la querían y nunca la habían aceptado, diciendo que de la familia de Gabriel únicamente había conocido a la hermana de él, de nombre Flor, quien visitaba a Elizabeth y quien es la madrina del niño. Comenta que para el año 2008, la familia de Elizabeth estaba conformada por el compañero Gabriel Antonio y por el hijo Gabriel Esteban, que durante el tiempo de convivencia de la citada pareja nunca se llegaron a separar, advirtiendo que para el momento del deceso de Gabriel, éste se encontraba en la casa de los padres, ya que el iba cada 8 o 15 días a cuidarlos a ellos, o a cuidar la casa cuando ellos se iban, entonces en una de esas visitas fue que le sucedió el percance y falleció y como no querían a Elizabeth no le avisaron, razón por la cual ella se dio cuenta del deceso de su compañero días después. Para finalizar se le pregunto a la testigo cuando había sido la última vez que había visto al señor Gabriel antes de su deceso, a lo que respondió que no recordaba, manifestando que el señor era muy constante en la casa, salía al trabajo y volvía a la casa, aclarando que antes de morir el señor Gabriel, ella llevaba como 1 mes sin verlo. Por último, se le preguntó a qué horas salía el señor Gabriel a trabajar, contestando que no sabía decir la hora porque ella también salía a laborar, indicando que creía porque él trabajaba con los papas y en esos almacenes trabajan después de las 8, y que ella salía para su trabajo tipo 6 a.m.

Testigo que se torna sesgada, ya que su conocimiento frente algunos puntos del cuestionamiento es precisa y responsiva, pero carece de conocimiento frente a

otros asuntos puntuales, resultando extraño por el supuesto grado de amistad que tenía con la demandante y el señor Gabriel; encontrando en su declaración que tiene conocimiento preciso en fechas y el desarrollo de ciertas situaciones, pero cuando se le indaga de cosas más puntuales como el horario en que veía salir a trabajar al señor Gabriel o por qué recuerda con precisión ciertas fechas, no sabe dar una respuesta clara y resulta evasiva en sus respuestas. Percibiéndose de su declaración que el conocimiento de muchas de las situaciones que afirmaba era en razón de que se lo contaba la demandante.

Lo anterior, nos lleva a concluir que la probanza testimonial traídos al proceso por la accionante carece de la asertividad necesario para acreditar la convivencia pregonada, teniendo en cuenta que como se explicó con antelación, los testigos se encuentran sesgados en sus dichos al tener precisión frente a fechas y ciertas situaciones que favorecen a la demandante, pero no recordada otras situaciones de fácil recordación, encontrándose imprecisiones en sus afirmaciones que develan falta de espontaneidad en sus dichos y desconocimiento real de la relación sentimental existente entre la demandante y el asegurado fallecido.

Tampoco es creíble el relato de la actora en su interrogatorio de parte, en el sentido que solo vino a saber de la muerte de su su compañero marital de quien nunca se separó, ocho días después de haber sido asesinado y cuando ya había sido sepultado, pues las reglas de la experiencia nos enseñan que una pareja marital, no se va a desentender por ocho días del paradero de su pareja, y menos cuando concia que estaba en casa de sus padres donde lo podía ir a buscar.

Continuando la Sala con el análisis de la prueba documental, se encuentra en el legajo, el registro civil de nacimiento del menor Gabriel Esteban Álzate Parra, en el que se anota que nació el 26 de julio de 2000, siendo sus padres Gabriel Antonio Álzate Velásquez y Elizabeth Parra (01.ExpedienteDigitalizado fl.12); también se encuentra en la foliatura que la demandante en nombre propio y en representación de su hijo, reclamó la pensión de sobreviviente ante Colpensiones el 12 de agosto de 2009, por el deceso de su compañero y padre respectivamente (archivo 02ExpedAdmin(F23) - GRP-HPE-ES-CC-70092887-3_1- folio 3); dando respuesta la accionada mediante acto administrativo No.017292 del 13 de septiembre de 2010, concediendo la prestación en un 100% a favor del menor Gabriel Esteban y negándosela a la demandante por no haber acreditado el requisito de convivencia (01.ExpedienteDigitalizado fls.20 a 24)

También encontramos en la foliatura que la señora María Velásquez, madre del asegurado fallecido, el día 2 de abril de 2008 reclamó la prestación de sobreviviente, siendo esta negada mediante resolución N. 006593 del 27 de febrero de 2009, argumentando en su momento el Seguro Social que la reclamante no dependía económicamente de su hijo.

Continuando con el análisis de la prueba documental, encontramos que reposa en la foliatura la investigación administrativa que fue adelantada por el Seguro Social una vez la demandante efectuó la reclamación pensional, encontrando en esta investigación varios legajos de vital importancia, como son la factura de servicios exequiales del asegurado Gabriel Antonio, desprendiéndose que esta fue sufragada por el señor Jairo Moreno Bouhot (fl.2 y 3 del expediente administrativo archivo GRP-HPE-EF-CC-70092887-2). También encontramos que el asegurado fallecido se encontraba afiliado a la EPS del ISS como cotizante, sin embargo, su hijo Gabriel y la señora Elizabeth hacían parte del régimen subsidiado en salud, esto es, no tenían la calidad de beneficiarios del afiliado fallecido, situación que se acredita con los documentos insertos a folios 44, 49 y 50 del archivo GRP-HPE-ES-CC-70092887-3_2. Anexándose a continuación el registro fotográfico de los mismos.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud - FOSYGA

Información de Afiliados en la base de datos unica de afiliación al Sistema de Seguridad Social
Resultados de la consulta

Fecha de proceso: 11/08/2009 10:45:10 a.m.
Estación de origen: 200.21.252.205
Usuario: invitado

Información Básica del Afiliado

Tipo Identificación:

CC

Numero Identificación:

43016480

Nombres:

ELIZABETH

Apellidos:

PARRA

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):

//****

Departamento:

ANTIOQUIA

Municipio:

MEDELLIN

Datos de Afiliación

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA INICIO CONTRATACION	FECHA FIN CONTRATACION	FECHA AFILIACION ENTIDAD	FECHA ULTIMA NOVEDAD	TIPO AFILIADO
Activo	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	Subsidiado	01/04/2009	30/09/2009	01/10/2006	01/04/2009	CABEZA DE FAMILIA

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de las Resoluciones 812 de 2007 y 123 de 2008.
El Ministerio de la Protección Social comunica que la información contenida en la base de datos que sirve de soporte a la consulta en esta página, está certificada por la Gerencia General del Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, como fiel copia de lo reportado por las Entidades cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones 812 de 2007 y 123 de 2008 para la conformación de la Base de Datos Unica de Afiliados. Por lo tanto, las inconsistencias que refleje esta información son imputables a las EPS y no al Ministerio de la Protección Social.

2009

Frente a este tema del régimen subsidiado, a folio 11, tenemos que el día 27 de mayo de 2005, la demandante y su familia fue encuesta y clasificada en el Sisben, coligiéndose de este documento que el grupo familiar indagado estaba compuesto por el hermano de la demandante, su cónyuge e hijos, además de la demandante y su hijo, sin que en este grupo familiar este el señor Gabriel Antonio.

Instituto de Seguros Sociales EPS	07/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	06/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	05/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	04/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	03/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	02/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	01/2006	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	12/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	11/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	10/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	08/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	07/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	06/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	05/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	04/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	03/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	02/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales EPS	01/2005	30/09/1988	30	Cotizante	2280
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	12/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	11/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	10/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309

http://www.fosyga.gov.co/fisalud/CGI/ut_consulta_hac_det.asp

11/08/2009

Resultados Consulta Afiliado Compensado

Página 2 de 2

12 AUG 2009

Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	09/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	08/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	07/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	06/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	05/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	04/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	02/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	01/2004	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	12/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309

Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	12/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	11/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	10/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	09/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	08/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	07/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	06/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	05/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	04/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	03/2003	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	06/2001	31/12/1994	0	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	05/2001	31/12/1994	0	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	04/2001	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	04/2001	31/12/1994	0	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	03/2001	30/09/1988	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	03/2001	31/12/1994	0	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	02/2001	31/12/1994	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	01/2001	31/12/1994	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	12/2000	31/12/1994	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	11/2000	31/12/1994	30	Cotizante	2309
Instituto de Seguros Sociales E.P.S.	08/2000	31/12/1994	30	Cotizante	2309

LA INFORMACION REGISTRADA EN ESTA PAGINA ES REFLEJO DE LO REPORTADO POR LA EPS A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2000 EN SUS PROCESOS DE COMPENSACION

El Ministerio de la Protección Social comunica que la información contenida en la base de datos que sirve de soporte a la consulta en esta página, está certificada por la Gerencia General del Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, como fiel copia de lo reportado por las Entidades en el cumplimiento de sus procesos de Giro y Compensación. Por lo tanto, las inconsistencias que refleje esta información son imputables a las EPS y no al Ministerio de la Protección Social.

IMPRIMIR

CERRAR VENTANA

Continuando con el análisis de la aludida investigación, tenemos que en la misma reposa la entrevista realizada el 5 de diciembre de 2008 al señor Mario, quien adujo que vivía en la calle 43 carrera 80 b 33, siendo vecino del señor Gabriel en la citada dirección, conociéndolo por un lapso de 10 años aproximadamente, afirmando que tenía conocimiento que el asegurado vivía al momento de su muerte en la casa de sus padres, sin haberle conocido pareja, ni hijos.

Igualmente se indica que el 12 de agosto de 2010, se hizo visita en lugar de residencia de la señora Elizabeth Parra, ubicado en la carrera 33 e No.101 -6, donde

fue entrevistado el señor Yeison Armando Ruda, quien dijo vivir en el sector desde hacía 27 años, indicando que conocía de la convivencia de la señora Elizabeth y el señor Gabriel, quienes había convivido por espacio de 15 años hasta que murió Gabriel Antonio, procreando un hijo.

También encontramos que en la citada investigación administrativa, se hace alusión de a la carta dirigida al Seguro Social por parte de los familiares del asegurado el día 10 de septiembre de 2009, en la que se afirma que el señor Gabriel nunca convivió con Elizabeth, pues siempre vivió fue con sus padres, y que si bien no sabían de la existencia de un hijo de su familiar, de lo cual se enteraron después de su deceso, al haber sido este reconocido, es al menor a quien se le debe de reconocer el derecho, más no a su madre quien en ningún momento convivio con el causante.

Medellín, 10 de septiembre de 2009

Señores
DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PENSIONADO
SEGURO SOCIAL- SECCIONAL ANTIOQUIA
Calle 14 N° 48-32
Medellín

Ref.: Solicitud investigación tramite de pensión sobreviviente

Cordial saludo,

El día de hoy nos hemos enterado que por la muerte de nuestro hijo y hermano **GABRIEL ANTONIO ALZATE VELASQUEZ**, quien se identificaba con la cedula **70.092.887**, fallecido en enero de 2008, se presento a reclamar pensión de sobreviviente la señora **ELIZABETH PARRA**, CC 43.016.480 y para su hijo menor **GABRIEL ESTEBAN ALZATE PARRA**, TI. 1001226378.

Al respecto manifestamos nuestra inconformidad con la reclamación ya que ella nunca convivió con el fallecido, aceptamos que aunque no era de nuestro conocimiento la existencia del hijo, nos enteramos que este fue reconocido por nuestro familiar y siendo así, es legal que la pensión se la concedan al menor para su mantenimiento, pueda estudiar y salir adelante; no estamos de acuerdo es que la madre del menor certifique que convivió con nuestro familiar siendo la realidad que el nunca salio de la casa de sus padres y que siempre hasta el momento de su muerte vivió con

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SOLICITUD

[Firma]

15
14

nuestro familiar siendo la realidad que el nunca salio de la casa de sus padres y que siempre hasta el momento de su muerte vivió con ellos.

La señora MARIA VELASQUEZ DE ALZATE, madre del fallecido y desconocedora de la existencia de ese hijo, hizo la reclamación de la pensión de sobreviviente, la cual fue negada por ustedes.

Hoy nos preocupa la decisión de ustedes de asignar la pensión a una señora que nunca dependió económicamente del fallecido.

21

Solicitamos se le asigne la pensión al menor GABRIEL ESTEBAN ALZATE PARRA y no a su madre como ella así lo pretende ya que según la Ley no le corresponde por no ser real la convivencia y haber presentado una declaración falsa.

Cordialmente,

[Firmas manuscritas]

Cordialmente,

<i>[Firma de Octavio Alzate Agudelo]</i> OCTAVIO ALZATE AGUDELO Padre del Fallecido	<i>[Firma de Maria Velasquez de Alzate]</i> MARIA VELASQUEZ DE ALZATE Madre del Fallecido
---	---

<i>[Firma de Ivan Dario Alzate V.]</i> IVAN DARIO ALZATE V. Hermano	<i>[Firma de Gilma Alzate V.]</i> GILMA ALZATE V. Hermana
---	---

Hermano

Hermana

Dirección: CALLE 43 CR 80B-33
Telefono: 250-51-82-250-44-79

Pruebas recaudadas en su momento por el ISS, que llevaron a la entidad como ya se dijo a negar el derecho pensional de la accionante, en calidad de compañera del asegurado fallecido.

Continuando con el análisis de la prueba, reposa en la foliatura múltiples declaraciones extraproceso que a su vez resultan contradictorias, pues de un lado se afirma que la demandante era la compañera del señor Gabriel Antonio Álzate y de otro lado, aseguran que el finado no tenía compañera y que siempre vivió con sus padres.

Trayéndose a colación los folios 26 y 27 del archivo 01ExpedienteDigital, en los que militan las declaraciones extraproceso rendidas el 13 de febrero de 2008 por las

señoras Martha Libia Ruda de Rúa y Olga Lucia Arenas Vallejo rendidas, en las que las deponentes al unísono manifestaron que conocían a la pareja de Gabriel y Elizabeth desde hacía 14 años aproximadamente, que siempre los vieron viviendo junto sin llegarse a separar hasta el deceso del señor Gabriel, indicando que la citada pareja había procreado un hijo.

En similar sentido declararon el 8 de septiembre de 2017, las señoras Flor Ángela Álzate Velásquez y Teresa de Jesús Loaiza Jiménez (folios 28 y 29)

De otro lado, y contrario a estas afirmaciones declararon el 3 de febrero de 2008, las señoras Martha Cecilia Zapata Pérez y Diana Leticia Duque Rincón, quienes de manera uniforme manifestaron que conocieron al señor Gabriel por espacio de 13 años, y que siempre lo vieron viviendo donde su madre María Velásquez, que era de estado civil soltero, sin hijos. (folio 47 del expediente administrativo archivo No. GRP-HPE-ES-CC-70092887-3_4); en igual sentido declaró el señor Iván Darío Álzate el día 14 de noviembre de 2008 (página 11 del expediente administrativo archivo No. GRP-HPE-ES-CC-70092887-3_3)

Prueba documental de la que no es posible inferir con claridad y precisión la existencia de una convivencia y comunidad de vida entre la señora Elizabeth y el asegurado fallecido, por el contrario, existe evidencia que lleva a concluir que entre la demandante y finado no estuvo vigente esa comunidad de vida, ya que resulta extraña para esta colegiatura que entre compañeros permanentes se puedan presentar situaciones tales como, que el señor Gabriel Antonio desde el año 1988 hasta el mes de diciembre de 2007, estuvo asegurado en la EPS del ISS, como cotizante y en ningún momento afilió como beneficiarios a la supuesta compañera, ni a su hijo menor de edad, pues como lo confesó la misma demandante en su interrogatorio, tanto ella como su hijo siempre habían estado afiliados al SISBEN (régimen subsidiado en salud), situación que igualmente está acreditado con la prueba documental anexa.

También resulta extraño y poco lógico, que la demandante no se haya enterado del deceso de su supuesto compañero, sino ocho (8) días después del suceso, tanto así que no asistió ni a las honras fúnebres, situación que nos llevan a desvirtuar la existencia de una real convivencia, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida

de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado.

De esta manera, analizada en su conjunto la prueba aportada al litigio, esta colegiatura concluye que la demandante no allegó elementos probatorios convincentes que permitieran concluir que convivió con el causante durante los 5 años anteriores a su deceso, esto es del mes de enero de 2003 al mismo mes del año 2008, pues no existe prueba que acredite esta circunstancia, y en razón a ello, a juicio de la Sala, no se probó razonadamente cumplir con el requisito que exigen las normas legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, para efectos de definir la procedencia o no del derecho pensional, siendo carga de la parte actora acreditar los supuestos de hecho invocados como fundamento de la acción en los términos de los artículos 164 y 167 del C. G. del P, sin que en el caso de autos haya cumplido con la carga probatoria.

Conforme las consideraciones, fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se REVOCARÁ la decisión de primer grado para en su lugar, absolver a COLPENSIONES. de las pretensiones incoadas en su contra por la parte actora, declarando probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO, de manera que, por sustracción de materia, se hace innecesario pronunciamiento sobre los demás puntos de la apelación impetrados por los apoderados de los sujetos procesales.

Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia del 1 de julio de 2021 proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el

proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **ELIZABETH PARRA** contra **COLPENSIONES**, para en su lugar ABSOLVER a la accionada de todas las pretensiones incoadas por la actora por la prosperidad de la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO.

SEGUNDO: Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c3bfd2ca6a464e21f248b271dcddd916f431bd8b86285ea99ede911d40d5a82a**

Documento generado en 02/08/2023 03:10:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>